

Nicaragua. Dictadura y revolución *

Roberto González Arana¹

(rogonzal@uninorte.edu.co)

Resumen

Este trabajo describe la historia reciente de Nicaragua y analiza los factores políticos, económicos y sociales que hicieron posible la finalización de cuatro décadas de dictadura en este país centroamericano.

Abstract

This essay describes the recent history of Nicaragua and analyzes the political, economical and social factors that led to the end of four decades of dictatorship in the Central american country.

Palabras claves

Dictadura, familia Somoza, revolución sandinista, elites nicaragüenses, dominación norteamericana.

Keys Words

Dictatorship, Somoza family, sandinist Revolution, nicaraguan elites, American intervention.

* Este trabajo hace parte de la investigación Revoluciones latinoamericanas del siglo XX, financiado por la Vice rectoría Académica de la Universidad del Norte.

¹ Ph.D en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Historia de la Universidad del Norte. Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y caribeños, Adhilac. Coordinador del grupo de investigación Agenda Internacional.

"Delante de la imagen de Sandino, delante de la memoria de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y de toda la humanidad, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa Patria Libre o Morir y juro defender con las armas en la mano, la dignidad nacional y luchar por las oprimidos y explotados. Si cumplo esta promesa la liberación de Nicaragua y la de todos los pueblos será mi logro.

(JURAMENTO DE INGRESO AL FRENTE SANDINISTA)

Antecedentes

La historia de Nicaragua, desde su independencia, al igual que la de muchos países latinoamericanos, ha estado ligada estrechamente a la política exterior de los Estados Unidos. Ya desde los años cuarenta del siglo XIX los norteamericanos obtenían beneficios de esta nación centroamericana por medio de sus viajes a través del río San Juan y el lago de Nicaragua, con el propósito de transportar carga y pasajeros estadounidenses que se dirigían desde la Costa Atlántica hasta California en búsqueda de oro. Con la posterior intervención del filibustero William Walker a mitad del siglo XIX, se comprobaría igualmente, el interés norteamericano sobre Nicaragua, ya que por su privilegiada posición geográfica brindaba la posibilidad de construir un canal interoceánico por su territorio.

Nicaragua, al igual que la mayoría de los países centroamericanos tuvo un desarrollo capitalista particularmente tardío basado en la agroexportación, el cual centró su atención en la región occidental. En opinión del investigador Carlos Vilas, fue un capitalismo más avanzado en la esfera de la comercialización y el financiamiento que en el área de la producción y "la mayor parte de la producción se mantuvo en manos de productores locales, pero subordinados al capital comercial y financiero y al procesamiento controlados por el capital extranjero y la gran burguesía local. El proceso de proletarización de la fuerza de trabajo fue lento, y sometido a una fuerte estacionalidad (Vilas, C, 1984, p.67) pues se carecía de una estabilidad ocupacional.

El inicio del siglo XX coincide en Nicaragua con los últimos años de gobierno del general José Santos Zelaya (1893-1909), protagonista de la llamada revolución liberal, mediante la cual se profundizó la separación entre la Iglesia y el Estado, se recuperó el dominio inglés del territorio de la Mosquitia en la Costa Atlántica, entre otras cosas. A nivel internacional, se produjeron las primeras inversiones norteamericanas directas en el país, en transporte fluvial, minería, explotación de bananos y madera. Posteriormente, las buenas relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Zelaya se irían deteriorando debido a las desmedidas pretensiones norteamericanas de expandir su dominio económico y político sobre Nicaragua.² La principal causa del conflicto fue la negativa del presidente Zelaya a firmar un tratado mediante el cual se le concediesen derechos exclusivos a Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua, a lo que se añadió su apertura hacia los mercados financieros londinenses y su acercamiento a Japón y Gran Bretaña. En diciembre de 1909 Zelaya anunció su renuncia a la presidencia de Nicaragua, aclarando antes, que tomaba esta decisión en aras de poner fin a las hostilidades con el gobierno de los Estados Unidos. Pese a esto, la salida de Zelaya no redujo los enfrentamientos por el control del poder entre las élites políticas, así como tampoco, el interés norteamericano por aumentar sus esferas de influencia en el país.

De la Intervención Norteamericana al comienzo de la Dictadura

En 1912, a petición del entonces presidente Adolfo Díaz, las fuerzas militares de los Estados Unidos invadieron Nicaragua, ocupación que se prolongaría hasta 1925. Luego, ante una nueva intervención en 1926, el líder nacionalista Augusto César Sandino sería quien dirigiría la justa expresión popular de rechazo ante la agresión a la soberanía nicaragüense. Sandino organizó un ejército al que se integraron campesinos, obreros -especialmente de las minas y plantaciones- y algunos terratenientes medios. Después de seis años de lucha en contra del ejército de Sandino, y bajo la presión internacional, los

² Lo cual no había sido distinto en otros países. Por ejemplo, también los Estados Unidos se distanciaron del gobierno de Porfirio Díaz en México (1876-1911) justo cuando este gobernante diversificó su comercio a comienzos del siglo XX.

marines norteamericanos se retiraron de Nicaragua en 1933, no sin antes designar a Anastasio Somoza García como jefe de la Guardia Nacional en este país. Somoza era un militar de clase social media, vinculado estrechamente con las familias nobles del país (Debayle, Sacasa, Moncada, Lacayo, entre otras), y desde entonces serviría fielmente a los intereses norteamericanos en la región, participando en actividades muy cuestionadas. Una de ellas fue el asesinato de Sandino, sobre lo cual declaró cínicamente en una famosa entrevista: "lo hice por el bien de mi país". Lo que no admitió fue que este líder una vez entregadas sus armas y reintegrado a la vida civil, representaba un peligro para los Estados Unidos y para las élites nicaragüenses, pues día a día ganaba mayor apoyo entre los sectores populares y por ello, eventualmente podía ser un contendiente muy fuerte en alguna elección presidencial.

Después, mediante un golpe militar en 1936, Somoza García destituyó al presidente liberal Juan B. Sacasa, afianzando de esta forma su poder, el cual legitimaría luego -en enero de 1937- al elegirse como presidente de Nicaragua, tarea en la que contó con el apoyo de la clase dominante que veía en él a un restaurador del orden social y un vehículo eficaz para garantizar su influencia en el gobierno. De igual forma, la dictadura pasaba a ser intermediaria del dominio norteamericano en Nicaragua, de lo cual precisaba en ese momento Estados Unidos, de acuerdo con su política del *buen vecino*, impulsada por el presidente Franklin D. Roosevelt.

En otras palabras, se trataba de *garantizar la conservación de los intereses de Washington* en Latinoamérica, afectados considerablemente por efectos de la Gran Depresión económica de 1929-1932. Esta crisis igualmente tuvo consecuencias negativas para los países latinoamericanos, como es el caso de las exportaciones mercantiles, las que se redujeron al 65% (Prieto, A, 1988, p.36).

Ante el auge de los movimientos nacionalistas revolucionarios -compulsados por el descenso en el nivel de vida de la población- las élites nacionales optaban por luchar contra el poder de los monopolios extranjeros en la región. En contraste con esta postura, Somoza favorecía el mantenimiento del control ejercido por los monopolios norteamericanos en Nicaragua, y simultáneamente, su dictadura garantizaba el *orden social* mediante la represión política. A nivel interno, la dictadura sería la expresión de la llamada *oligarquía terrateniente*. Anastasio Somoza apoyó su gestión a través del control al Ejército y al aparato burocrático estatal; y una alianza con las facciones de la clase dominante -en su mayor parte con antiguos sectores liberales- a quienes facilitó la posibilidad de prácticas ilegales para su rápido enriquecimiento. Con posterioridad, Somoza se apoyó en un sector del viejo Partido Liberal para la fundación del Partido Liberal Somocista. Progresivamente la familia Somoza, que para los años 40 no pertenecía a las más acaudaladas del país, fue aumentando su poderío económico hasta convertirse en un verdadero monopolio -en 1974 su fortuna se calculaba en 400 millones de dólares- el cual controlaba gran parte de la agricultura, el comercio y la industria. En 1956 Anastasio Somoza García, fue ultimado por el poeta nicaragüense Rigoberto López Pérez, después de lo cual sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, le sucedieron en el poder, aún cuando periódicamente no figurasen como titulares formales de la presidencia.

En el periodo 1950-1960 se dio en Nicaragua un proceso de sustitución de tipos tradicionales de producción, lo cual permitió que el algodón se convirtiera en el principal rubro de exportación, estimulado por el alza de los precios internacionales. Después de esta fase, con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCC) en los años sesenta, se darían -aunque de forma incipiente- los primeros pasos para la relativa industrialización de Nicaragua y el resto de Centroamérica. El crecimiento industrial estuvo determinado por el capital extranjero, concentrado en la manufactura. Así el porcentaje de la inversión foránea que en 1959 era de un 27,8%, en 1969 se incrementó a 54% (Lozano, L, 1985, pp.128-129).

Posteriormente, el MCC comenzó a estancarse pese a los ingentes esfuerzos de sus integrantes para reactivarlo.

Durante la dictadura somocista la economía en Nicaragua se estructuró con base en los intereses norteamericanos, por medio del abastecimiento de materias primas para su mercado. Incluso, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial se le concedieron a Estados Unidos, derechos sobre el territorio nicaragüense.³ Otro hecho destacado era la ausencia de una burguesía nacional propiamente dicha pues existía más bien una burguesía gerencial que vivía del financiamiento externo y sólo se beneficiaba con una parte de la ganancia, ya que el resto iba a los bancos extranjeros (Vilas, C, 1987, pp. 28-31).

Crisis del Régimen

El advenimiento de los años setenta trajo consigo cambios significativos en las condiciones de vida de los nicaragüenses. Así, por ejemplo, miles de campesinos se vieron afectados por la rápida expansión del cultivo del café y algodón, aspecto que generó un aumento de la concentración de tierras a favor de los terratenientes, lo cual redundó en la pérdida de terrenos de cultivo y aumento del desempleo. También este sector fue víctima de abusos y expropiaciones por parte de la Guardia Nacional somocista. Por otro lado, la burguesía nicaragüense -beneficiada por el crecimiento industrial iniciado en los sesenta- fue perdiendo poder ante la consolidación del *Grupo Somoza*, que ya para estos años iniciaba su participación y control de la banca nacional.

El terremoto de 1972 en Managua tuvo serias consecuencias económicas y sociales para el país. En esta tragedia murieron más de diez mil personas y el 75% de las unidades de vivienda familiar fueron destruidas, en su mayor parte pertenecientes a los sectores de ingresos medios y bajos. Ante la débil respuesta gubernamental, los grupos afectados

³ También en Colombia durante el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) se efectuaron unos pactos secretos con los Estados Unidos para garantizar su incursión en el país *en caso de ser necesario*.

realizaron diversas manifestaciones de oposición al régimen. Por su parte, el *Clan Somoza* canalizó para sí las ayudas internacionales destinadas a la reconstrucción de la ciudad. Este hecho se constituyó en una causa del debilitamiento en la unidad en torno al gobierno somocista, pues diversos sectores se vieron desplazados en el control de sus intereses económicos. Ya para este periodo, el sector privado de la economía estaba conformado por cuatro áreas: el Grupo Somoza, el Banco de Nicaragua y Banco Americano, la burguesía media y los pequeños productores y comerciantes. Simultáneamente, a comienzos de los años setenta, existía en Nicaragua el proletariado industrial y agrícola (no menos del 40% de la población activa); también el campesinado formaba la segunda categoría social de la población (aproximadamente 23%); las capas medias urbanas: estudiantes, profesionales, maestros, etc, (constituían el 18% del movimiento popular) y la pequeña burguesía urbana que constituía del 15 al 17% de la población económicamente activa. Otro factor que influyó en el declive de la dictadura fue la situación de pobreza de un gran porcentaje de la población, con un nivel de desempleo creciente -casi un 19% a comienzos de los setenta- además, sin posibilidades de articular sus demandas en el sistema político imperante, que por el contrario, reprimía toda manifestación popular.

A partir de 1975 se redujo paulatinamente la inversión privada, tanto nacional como extranjera, debido a la inseguridad política y económica en que vivía el país, como consecuencia del aumento de la resistencia popular y la lucha revolucionaria, a lo que se agregaría una grave crisis debido a la insolvencia financiera, los desequilibrios económicos y un bajo crecimiento. La causa principal de este precario crecimiento sería sin duda que el dominio del capital de los listados Unidos en la economía nicaragüense alcanzó su más alto nivel, lo que dificultó en gran medida que se dieran avances en el índice de desarrollo humano. Sobre la bonanza económica de los últimos años de la dictadura, el investigador nicaragüense Orlando Núñez sostiene que hubo una disminución de las importaciones y se "aprovechó la subida de los precios de exportación para productos como el café -de 100 a

108 dólares el quintal entre 1976 y 1978-, la carne, el algodón, el oro; a lo que también se agregó un aumento del endeudamiento externo, que pasó de 500 millones de dólares en 1974 a cerca de mil en 1978 (Núñez, O, 1987). A mitad de los años setenta, casi el 70% del Producto Nacional Bruto (PNB) se basaba en las exportaciones, en contraste con el 10% de México y 18% de Chile (Collins, J, 1985, pp. 218-219).

En el plano político, varios factores incidieron en la crisis de la dictadura, así, entre otros, un hecho destacado fue el aumento de la represión política en el periodo 1974-1978, motivado por la tensión social en el país y la crisis socioeconómica. En 1974, los derechos constitucionales fueron suspendidos, lo cual propició acciones desmedidas de la Guardia Nacional en contra de los opositores al régimen. Ejemplo de esto fue la política de terror abierto en contra de campesinos, movimientos urbanos, activistas religiosos y de organizaciones políticas. Todos estos elementos contribuyeron a empañar más la ya desgastada imagen internacional de la dictadura somocista, a lo que se añadiría el inicio del gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos, en 1977, quien proyectaba una imagen exterior de *defensor de las libertades y los derechos humanos*, por lo cual, sus relaciones con Nicaragua adquirirían desde entonces un nuevo contexto.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 había significado un enorme estímulo para las luchas populares en toda América Latina. En Nicaragua este ejemplo fue seguido por varios movimientos guerrilleros, entre los que sobresale el del Chaparral, conformado por izquierdistas mexicanos, nicaragüenses y dos cubanos. La columna *Rigoberto López Pérez* fue emboscada por el ejército hondureño en Chaparral (región hondureña ubicada cerca de la frontera con Nicaragua) acción en la cual murieron algunos de sus integrantes, mientras que otros resultaron heridos, entre ellos Carlos Fonseca Amador. En 1960 Silvio Mayorga, Tomás Borge y el propio Fonseca fundaron la Juventud Revolucionaria Nicaragüense (JRN). Movimiento que se encargó de organizar, desde el exilio, la lucha contra la dictadura somocista. Sobre esto, declararían Carlos Fonseca:

En 1959 me vinculé a los nicaragüenses que vivían en Costa Rica y que habían participado allí en las luchas contra los monopolios fruteros yanquis. Sentimos la necesidad de vincularnos con nuestro pueblo, y yo ingresé clandestinamente a Nicaragua en 1960 para intentar organizar un trabajo clandestino urbano que nos permitiera preparar la guerrilla rural y lanzar la lucha general en el país.

Todos estos hechos fueron antecedentes para la formación del Frente de Liberación Nacional que en 1961 se fundó en Tegucigalpa, Honduras, por iniciativa de Carlos Fonseca, Tomás Borge, Silvio Mayorga y el coronel Santos López. Posteriormente, en 1962 esta agrupación tomaría el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), reivindicando con ello las ideas antiimperialistas de Augusto César Sandino en búsqueda de la soberanía e independencia nacional. Más tarde al Frente se integraron jóvenes pertenecientes a la Juventud Patriótica, la Juventud Socialista, el Movimiento Nueva Nicaragua y la Juventud Revolucionaria Nicaragüense. En un mensaje del Frente Sandinista a los estudiantes revolucionarios -emitido en abril de 1968- se expresaron, en líneas generales, algunos de los objetivos planteados por esta organización.

Ansiamos poner fin a la sociedad dividida en explotadores y explotados, a la sociedad dividida en opresores y oprimidos. Declaramos que nuestro magno propósito es devolver a los trabajadores, las riquezas que mediante la fuerza les fueron arrebatadas. La independencia nacional, la derrota al imperialismo extranjero, son requisitos para la edificación de un nuevo mundo (...) en la búsqueda de esta nueva vida, nos guían los nobles principios de Marx. La historia moderna demuestra que los principios marxistas son la brújula de los más resueltos defensores de los humildes..) el marxismo es la ideología de los más ardientes defensores del hombre latinoamericano. Ya es hora de que la mente de los revolucionarios nicaragüenses comparta el ideal marxista de liberación proletaria.

En este documento, firmado por Carlos Fonseca, se pueden apreciar los elementos de la filosofía marxista acogidos por el Frente Sandinista. Más adelante con la manifestación de diversas tendencias al interior del Frente Sandinista, existirían sectores que plantearían diferentes métodos para llegar al poder y diversas alternativas para lograr la instauración

del socialismo. Los primeros enfrentamientos armados del FSLN con la Guardia Nacional se dieron en las acciones del río Bocay y río Coco (1963), en las que resultó derrotada la guerrilla, hecho que la condujo a la necesidad de realizar más trabajo político con el campesinado y otros grupos sociales en Nicaragua. Se trataría así, de rechazar los levantamientos armados sin una previa preparación de las bases sociales y militares a nivel interno.

Conviene subrayar que la Revolución cubana, además de estimular al movimiento revolucionario latinoamericano, condujo a la modificación de la política exterior norteamericana para esta región, pues el triunfo en la isla representó un duro revés a sus intereses. Así, con el inicio de la administración de John F. Kennedy en 1961, "Estados Unidos planteó el programa de Alianza para el Progreso, que proponía realizar reformas "desde arriba" en la vida económica, política y social de la región, para "conjurar la revolución popular, contener la difusión de las ideas comunistas" y aislar a la Cuba revolucionaria". Los ofrecimientos planteados por la Alianza, disminución del analfabetismo, apoyo económico, inversión en el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, reforma agraria, contribuyeron a crear expectativas en los sectores desposeídos y disminuyeron el auge de los movimientos revolucionarios.

En Nicaragua a estos hechos se agregó la elección de Rene Shick para la presidencia en 1963 -aún cuando en la práctica seguía en el poder Anastasio Somoza-, acontecimientos que debilitaron el sentimiento antisomocista en el país. Posteriormente, el FSLN reapareció en Pancasán (1967) donde fue derrotado nuevamente, pero adquirió más experiencia y comenzó a ganar iniciativa en la lucha contra la dictadura, ya que en las condiciones de represión militar somocista, la vía pacífica no parecía el camino más expedito para acabar con la dictadura. Ya en los años setenta, el Frente Sandinista sería considerado como una alternativa política al régimen.

Ciertos sectores de la Iglesia nicaragüense jugaron un importante papel en el movimiento opositor al régimen somocista, los cuales recibieron la influencia de corrientes renovadoras al interior del catolicismo. Ilustrativo de ello fue el encuentro de obispos de Medellín, en 1968, donde se acordó utilizar la influencia de la iglesia en favor de los pobres y de su lucha por la liberación. El espíritu de Medellín fue introducido a Nicaragua por un *movimiento* de sacerdotes jóvenes, que el diario somocista Novedades llamó *los Siete sacerdotes de Marx* (Walker, T, 1985). Este movimiento, permitió la creación de comunidades religiosas de base en Managua, la Costa Atlántica y zonas rurales, quienes en su mayor parte se sumaron a los opositores de la dictadura. Conviene tener presente que existieron dos corrientes al interior de la Iglesia nicaragüense. De una parte estaban los católicos liderados por la jerarquía eclesiástica, opuestos a la dictadura pero no por ello interesados en una verdadera revolución social. Por otro lado, estaban los cristianos identificados con la Teología de la Liberación (hecho también común a otros países de América Latina) que apoyaban la lucha, e incluso al Frente Sandinista, pues se sentían comprometidos con la problemática social. En el seno de las comunidades de base, incluso en sectores de clase media, se formarían también militantes de movimiento sandinista, hecho que ilustra la composición heterogénea del FSLN.

En 1974 se conformó la Unión Democrática de Liberación (UDEL) fruto de la fusión de algunos pequeños partidos de oposición, con un programa que demandaba reformas económicas, políticas y diálogo nacional. Como represalia el régimen impuso la represión y el estado de emergencia. En la UDEL se organizaron también sectores de las élites nacionales e inversionistas ligados al capital extranjero, quienes se hallaban en contradicciones con el Grupo Somoza.

Estos grupos rechazaban la violencia como método para solucionar la crisis, a lo que proponían alternativas "pacíficas y cívicas", que hicieran posible instaurar *un somocismo sin Somoza*, donde la burguesía pudiese competir libremente entre sí por las ganancias,

manteniendo al mismo tiempo el control del poder político"(Pérez-Stable, M, 1982, p.135). Alrededor del sector opuesto a cambios radicales se agrupaba el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); la jerarquía superior de la Iglesia Católica; el diario *La Prensa*, cuyo director era el líder principal de la UDEL, Pedro Joaquín Chamorro, y algunos sectores del campesinado de tendencia anticomunista.

No obstante los esfuerzos reformistas de algunos sectores medios, muchos representantes de los partidos Liberal o Conservador fueron progresivamente radicalizando sus metas al no obtener respuestas satisfactorias de la dictadura, sumándose así al amplio bloque de nicaragüenses -de todas las clases sociales- opuestos al régimen y que participaron activamente en la insurrección. Así, por ejemplo, las clases más desfavorecidas, quienes sufrían principalmente de los abusos y corrupción del sistema, se unieron a sindicatos, comunidades cristianas de base, colaborando con el FSLN o integrándose directamente a la lucha revolucionaria.

Con la reunificación del Frente Sandinista en marzo de 1978, ante la necesidad de una fuerza más sólida, la Dirección Nacional quedaría integrada por nueve miembros, de los cuales tres pertenecían a cada una de las tendencias (proletaria, insurreccional de guerra popular prolongada). Según Andrés Pérez, la unificación del FSLN (1978) no eliminó las diferencias substanciales (a nivel político e ideológico) que existían entre las tres facciones de esta agrupación. La cuota proporcional de poder a nivel del partido y del gobierno asignada a los miembros de cada tendencia, fueron, a su juicio, un signo más de la persistente división al interior de este movimiento. El mencionado autor añade que la unión dentro del sandinismo se mantuvo como consecuencia de las necesidades creadas por la guerra pues se prescindía de un partido sólido. Pérez basa su hipótesis en que, una vez concluida la guerra y disuelta la contrarrevolución armada (Contra), resurgieron las viejas diferencias que permanecían dentro del FSLN (Pérez, A, 1992, pp.119-122).

La Insurrección (1977-1979)

Si bien a comienzos de los setenta existía unidad de los sectores económicos y políticos más influyentes alrededor de la dictadura, en 1977 este apoyo comenzó a debilitarse notoriamente debido a graves divergencias de estos sectores con el Grupo Somoza, que al no resolver satisfactoriamente las contradicciones con estos sectores, contribuyó a que organizaciones como la UDEL adquiriesen el carácter de voceros suyos. El 20 de septiembre de 1977 apareció en el periódico *La Prensa* un comunicado donde la UDEL dio a conocer sus propuestas para la democratización del país. Estas eran: a) levantamiento inmediato del estado de sitio y la censura a los medios de comunicación; b) vigencia efectiva de la libertad de organización política y sindical; c) amnistía e indulto para los presos y exiliados políticos, entre otras medidas (Lozano, L, 1985). A raíz del asesinato de su líder Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978 -hecho que marco la agudización de la crisis de la dictadura somocista-. la UDEL y sus partidarios radicalizaron sus posiciones con respecto al régimen, manifestando su abierto desafío al gobierno al organizar un paro nacional, en el que exigían la renuncia de Somoza a la presidencia de la República. En octubre de ese mismo año, destacadas personalidades de la iniciativa privada, el medio intelectual, religioso y profesional dieron a conocer la creación del *Grupo de los Doce*, cuyos integrantes se pronunciaron en contra de la dictadura, por ser ésta la fuente de toda la violencia en el país, y resaltaban el deseo común de "una nueva forma de organización democrática y social.

Las fisuras del Somocismo

Sobre la importancia del FSLN este grupo destacaba: "a lo largo de más de una década el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha luchado con generosidad por lograr un cambio en Nicaragua y la sangre derramada por los jóvenes es el mayor testigo de la permanencia y presencia de esa lucha no vacilamos en hacer un llamado a todos los nicaragüenses conscientes para dar una solución en la cual no se puede prescindir de la participación del FSLN si se desea una paz permanente y definitiva"(La Prensa, Octubre 21 de 1978).

El Grupo de los Doce manifestaba de esta forma ser una representación política del FSLN y simultáneamente, mediador entre el movimiento popular y las élites nicaragüenses. Sobre estas bases se definió un programa de gobierno -conocido como el Programa de San José- que luego se concretaría en el Programa de la Junta de Gobierno de junio de 1979-. Por otra parte, durante 1978 fueron organizados dos frentes de oposición al gobierno a saber: El Frente Amplio Opositor (FAO) -integrado por Los Doce, el Partido Liberal Independiente, Movimiento Liberal Constitucional, Partido Conservador Nicaragüense, entre otros- y el Movimiento Pueblo Unido (MPU). La UDEL, el FSLN y otras organizaciones impulsaron al Frente Opositor, pese a lo cual las élites ganaron rápidamente su control imponiendo así la visión conciliadora norteamericana de obtener una mediación ante la dictadura somocista. El FAO se fue constituyendo de esta forma en el frente de la burguesía opuesta a Somoza y a las metas revolucionarias del FSLN. Por otra parte, LOS esfuerzos políticos del Frente Sandinista dirigidos a las organizaciones de masas se cristalizaron en julio de 1978, cuando un total de 22 organizaciones firmaron el "Manifiesto de surgimiento del Movimiento Pueblo Unido", considerado la contraparte de la FAO el cual se proponía, entre otros objetivos, movilizar al pueblo para el derrocamiento de la dictadura e impulsar el desarrollo del proceso unitario de las fuerzas revolucionarias. Todos esos objetivos se concretarían más adelante (noviembre de 1978) con la publicación de su Programa, en el cual se proponían "instaurar un gobierno de unidad democrática, confiscar las tierras a los somocistas y erradicar el analfabetismo en el país" (Barricada, julio 18 de 1987).

Agitación y Crisis Política: Del antiguo al nuevo régimen

El desarrollo de la crisis económica del régimen somocista se materializó a fines de los años setenta y tuvo como causas, según Orlando Núñez, un agotamiento del modelo agroexportador derivado del estrangulamiento del sector externo, depresión económica, diferencias en las ganancias de las élites y descenso del nivel de vida de la población,

aunado a la pérdida de legitimidad del régimen somocista, debilitamiento de la hegemonía norteamericana en la región centroamericana, y descontento de las masas (Nuñez, O, 1987).

Por su parte, el FSLN -que en 1976 había perdido en combate a su líder Carlos Fonseca- luego de la ofensiva de 1977 colaboró con los indígenas del barrio Monimbó (de aproximadamente 20 mil habitantes) en sus acciones de protesta al régimen y en su resistencia a la agresión de la Guardia Nacional. Con la toma del Palacio Nacional por el *Comando Rigoberto López Pérez* (agosto de 1978) se marcaba el comienzo de la etapa insurreccional del proceso revolucionario. Simultáneamente, la FAO realizó un llamado a un nuevo paro nacional con el objeto de lograr el "derrocamiento de la dictadura somocista y la democratización de Nicaragua" (La Prensa, agosto 25 de 1978). En el comunicado de la FAO se apreciaba la radicalización de sus propuestas con respecto a su discurso inicial, aunque tampoco esta vez en sus metas se incluía el propósito de expropiar los bienes del Grupo Somoza, ni el desmantelamiento de la Guardia Nacional. La estrategia de los círculos opositores era recuperar la iniciativa política en la lucha antidictatorial en momentos nada favorables al régimen, pues existía ya identificación de las masas con las propuestas revolucionarias del FSLN.

A nivel internacional, la política de Carter fue un factor que también incidió en el debilitamiento de la dictadura. Sin embargo, la posición del presidente norteamericano resultaba ambigua debido a que, por una parte, insistía en mantener su imagen exterior de *protector de los derechos humanos*, implantando un embargo sobre las ventas de armas a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y por la otra, apoyaba a diversos regímenes dictatoriales en América Latina (Chile, Paraguay). La estrategia de Carter correspondía al proyecto de *democracias restringidas*, según el cual, el gobierno de Estados Unidos se proponía recuperar su imagen exterior (deteriorada por la derrota en Vietnam) mediante el apoyo formal a planes democratizadores, como alternativas a las dictaduras

vigentes de entonces. A comienzos de 1977, los medios de comunicación estadounidenses iniciaron, con el apoyo implícito de Cárter, una campaña de denuncias sobre la corrupción y el alto nivel de represión de la dictadura somocista. En los diarios *Washington Post*, *New York Times* y publicaciones como *Time* y *Newsweek* aparecieron artículos con entrevistas a miembros de la Iglesia Católica nicaragüense sobre denuncias (violación de los derechos humanos y desapariciones), hechos que aumentaban la pérdida de popularidad del régimen (Labastida, J, 1984, p.81). La crisis del gobierno somocista se manifestaba a diferentes niveles, lo que se podría sintetizar en: a) el debilitamiento del bloque en el poder -donde existían sectores aliados incondicionalmente a Somoza hasta inicios de los 70- que, al no encontrar respuestas satisfactorias a sus peticiones de una mayor participación en el control del Estado, se fueron adhiriendo a la oposición; b) incremento y auge de la lucha revolucionaria, a la que cada vez se incorporaban más sectores opuestos a la dictadura, ya fuesen de clase media, burguesa, de la Iglesia Católica, proletarios, etc.; c) el deterioro creciente de la economía ante el estancamiento de la inversión privada, la fuga de capitales, el aumento de la deuda externa y la inflación; d) el creciente desprestigio internacional de la dictadura.

Con relación al control de la economía nicaragüense por parte de la familia Somoza y sus más inmediatos aliados, se han encontrados datos que ilustran cómo el nivel de concentración alcanzado por este grupo llegó a ser tal que, para 1979, era aproximadamente de un 25% de toda la capacidad productiva, así como también aumentó grandemente su influencia sobre el sistema bancario y parte del comercio y del transporte. A través de este aparato, particularmente de los bancos, el Grupo Somoza subordinó también a los comerciantes locales a su propia estrategia de acumulación (Fitzgerald, E.V.K., 189, p.264). Otro hecho que empeoró las relaciones de las élites con el gobierno somocista fue la implementación de un impuesto a los productos de agroexportación, lo cual estimulaba la fuga de capitales como respuesta a la inestabilidad del régimen, y al exceso de concentración de su poder. Una Comisión de las Naciones Unidas estimó que 800 millones

de dólares fueron sacados del país entre 1977 y 1979. En los últimos seis meses de la dictadura 315 millones de dólares desaparecieron del país, equivalentes a 3/4 partes del total de las ganancias obtenidas por exportaciones en un año (Collins, J, p.47). En 1977 el 5% de la población concentraba el 28% del ingreso, mientras que el 50% captaba sólo el 15%.

Sobre el nivel de control económico de los Estados Unidos sobre Nicaragua durante los años de la dictadura, hay quienes sostienen que este fue más que todo de carácter político-militar antes que económico. El investigador argentino Carlos M. Vilas afirma que, fue "un imperialismo de embajadores y generales, más que de industriales y banqueros, (...) Estados Unidos contaba con un aliado seguro para su control de la región o territorio de reserva para un eventual canal interoceánico en la región; hecho que para ellos representaba mayor interés que las inversiones económicas directas en Nicaragua" (Vilas, C, 1984, p.127). No obstante, también era importante la gran influencia norteamericana en la economía nicaragüense, pues era evidente el alto nivel de endeudamiento de la dictadura con los bancos privados extranjeros⁴ -donde predominaban los estadounidenses-, de quienes recibió grandes créditos con intereses superiores al 8% anual. Igualmente, fue muy importante el papel de Nicaragua como abastecedora de materias primas para la industria norteamericana.

El año 1978 fue crítico para la dictadura somocista. Al asesinato del periodista Pedro J. Chamorro (19 de enero) le siguieron el paro nacional empresarial en protesta por este hecho, el aumento de las manifestaciones populares en todo el país y el inicio de la insurrección armada. Las fuerzas guerrilleras del FSLN, comandadas por Germán Pomares, Víctor Tirado y Daniel Ortega, atacaron el campamento militar contrainsurgente en Santa Clara, mientras las fuerzas de Camilo Ortega ocupaban la ciudad de Granada y las guiadas por el cura guerrillero Gaspar García Laviana y Edén Pastora se apoderaban de

⁴ La deuda externa, que en 1970 era de 174,8 millones de dólares, alcanzó 1,000 millones en 1978.

Rivas. Luego vendrían el levantamiento de Monimbó -que duró toda una semana y donde cayó combatiendo el comandante Camilo Ortega- y la posterior toma de Estelí, Chinandenga, León, Masaya, Carazo y Matagalpa por el Frente Sandinista; a lo que la Guardia Nacional respondió con una fuerte represión, con un saldo de más de cinco mil muertos y doce mil heridos. En este convulso año también se dio la toma del Palacio Nacional, sede del legislativo, por el FSLN (22 de agosto), el rompimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con Nicaragua; manifestación del progresivo aislamiento internacional del régimen.⁵ Todos estos episodios reflejaban la inconformidad con una dictadura caduca que después de cuatro décadas en el poder no garantizaba la estabilidad económica y política del país.

Existen dos hipótesis sobre las causas que generaron la crisis de la dictadura somocista. Hay quienes, como la socióloga mexicana Lucrecia Lozano, sostienen que los factores económicos fueron "la base material de las movilizaciones políticas contra el régimen dictatorial". Por otro lado, está la hipótesis apoyada por los investigadores Richard Stahler-Sholk y Carlos Vilas para quienes la caída de la dictadura fue producto de una crisis política revolucionaria que, en determinado momento, activó una crisis económica Stahler-Sholck, R, 1990, p.66). Es decir, según esta mirada, la activación de la crisis económica fue el resultado de la crisis política. Vilas analiza el estado de la economía nicaragüense desde los años setenta llegando a la conclusión de que, si bien es cierto que hubo "un proceso de ahondamiento de la pauperización de las masas populares -a partir de la segunda mitad de la década de 1970- (...) este empobrecimiento de las masas, la degradación de su nivel de vida, no bastaban para configurar una crisis económica. Ni la crisis económica significa mucho en sí cuando existen las condiciones políticas para hacer de ella un factor que impulse la revolución". El mencionado autor considera que sólo a partir de 1978 se puede hablar de una verdadera crisis económica y que ésta no fue "producto del

⁵ Ya para ese año el FSLN recibía material militar para su lucha de Cuba, Venezuela y Panamá, así como también de algunas fuentes privadas de los Estados Unidos.

funcionamiento objetivo de la economía nicaragüense, sino de la reorientación política de una parte creciente de sus recursos (el endeudamiento externo por ejemplo) para tratar de frenar el ascenso revolucionario"(Vilas, C, op. Cit, 1984, pp. 140-150).

Resulta complejo sopesar la incidencia de los factores que originaron la crisis de la dictadura somocista. La existencia de las condiciones políticas desarrolladas a través de años de lucha revolucionaria, bajo la dirección del FSLN, permitieron la formación de una conciencia nacional en pro de un verdadero cambio político. Además, el desmedido afán de enriquecimiento del Grupo Somoza, su incapacidad de respuesta ante el aumento de la oposición y el paulatino deterioro del nivel de vida de la sociedad fueron, entre otros, dos elementos concomitantes que generaron la crisis de la dictadura. Si bien es cierto que el creciente descontento de la población en contra del régimen, halló en el Frente Sandinista un medio efectivo de lucha -ya fuese participando directamente o por medio de alianzas-, también es cierto que, la fuga de capitales, la disminución de la inversión y el aumento del desempleo, abonaron el terreno para la lucha revolucionaria. Cabría añadir que la existencia de un gobierno personal no partidario; el hecho de que las élites políticas no se correspondían con las élites socioeconómicas tradicionales; la corrupción como una práctica institucional y el ejercicio de la represión hacia los círculos opositores, permiten explicar de mejor forma las causas de la finalización del régimen dictatorial. Ya en México habíamos temido otro ejemplo del desgaste progresivo de un régimen como el de Porfirio Díaz que había acudido a los medios más inimaginables para prolongar indefinidamente su gobierno, *todo por el bien del país*.

Los antecedentes inmediatos a la caída de la dictadura somocista se expresaron a nivel nacional e internacional. En el plano exterior la Organización de Estados Americanos (OEA), en septiembre de 1978, exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar un informe sobre las violaciones en esta materia por parte del régimen. La OEA también aprobó la creación de una Comisión de Mediación entre la FAO y Somoza,

compuesta por Estados Unidos, Guatemala y República Dominicana, a lo cual accedió oficialmente el régimen en declive. Según José Luis Coraggio, el interés estadounidense en esta mediación era respaldar un *somocismo sin Somoza* manteniendo la Guardia Nacional e incluyendo el partido de Somoza (PLN) en el futuro gobierno de transición, Los Doce y el PU (Coraggio, J y Torres, R, 1987, pp.26-27). Aunque en parte coincidimos con ese análisis, diferimos en que, a nuestro modo de ver, hay evidencias que indican que hubo voluntad del gobierno estadounidense para apoyar hasta el último momento a la dictadura somocista, pues para Estados Unidos no existían, en primera instancia, motivos serios para relevar a Somoza del poder. Sólo cuando ya no encontró otra alternativa, el gobierno de Cárter se decidió a respaldar la salida del mandatario nicaragüense.

En esto, coincidimos con Shirley Christian, quien sostiene que la administración Carter centraba su atención básicamente, en lo relacionado con la violación de los derechos humanos en Nicaragua, lo cual significaba que, sus ayudas y otro tipo de presiones debían limitarse a conseguir objetivos específicos como la liberación de presos políticos y la anulación de restricciones a la Constitución (Christian, S, 1987, p.56). Ilustra también la posición norteamericana la carta enviada por el presidente Carter a Anastasio Somoza en junio 30 de 1978, de la cual transcribimos algunas partes:

He leído su declaración a la prensa del 19 de junio con gran interés y aprecio. Los pasos a favor de los derechos humanos que está tomando en consideración son signos importantes y cordiales y si se hacen realidad señalarán un avance importante para su nación en respuesta a ciertas críticas que, recientemente se han dirigido contra el gobierno de Nicaragua (...) Me siento satisfecho de saber su buena disposición a cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...) ha hablado usted de una posible amnistía para los nicaragüenses que se mantienen en prisión por razones políticas. Le ruego acelere estos trámites prometedores que usted mismo ha sugerido; esto servirá para mejorar la imagen exterior de los derechos humanos en Nicaragua (Christian, S, Ibid, p.65).

A nivel interno, la alianza entre las élites nicaragüenses, el Frente Sandinista y los movimientos de masas, ya se había concretado, lo cual permitió que la ofensiva final de junio-julio de 1979 resultara exitosa. Aunque se había previsto iniciarla en mayo por el sur, en la práctica las acciones armadas guerrilleras comenzaron en el mes de marzo por el norte, de forma conjunta al llamado de huelga general. Existió la tendencia -por parte del gobierno norteamericano y de la Guardia , Nacional Somocista- a subestimar la magnitud del movimiento insurreccional. Ellos consideraban que, el grupo de los *muchachos*, como se les llamaba a los militantes del Frente Sandinista, no estaban en posibilidad de vencer a un ejército experimentado como el de Somoza. Pero a estos jóvenes -quienes pertenecían a diferentes clases sociales- se uniría un amplio sector de la población, incluida la burguesía empresarial inconforme con el régimen. Muestra de ello fue la formación (febrero 1979) del Frente Patriótico Nacional (FPN), integrado por el MPU, el Grupo de los Doce, el Partido Comunista de Nicaragua y el Partido Liberal Independiente, entre otros. Estas alianzas posibilitaron la ejecución de un plan de lucha elaborado por el Frente Sandinista.

Sobre las causas de la alianza entre la burguesía y el Frente Sandinista existen diferentes posiciones. Para Núñez y Vilas, por ejemplo, la agudización de la crisis económica fue el factor decisivo que contribuyó a la radicalización de la burguesía. A esta tesis se opone la interpretación del norteamericano Jeffery Paige, quien al respecto afirma que, "la mayoría de los grandes algodoneros y cafetaleros estaban atados al Estado y a sus intereses y permanecieron con el régimen. Aún entre aquellos que se oponían a Somoza, en su mayoría vinieron a ayudar a los sandinistas y a la revolución armada sólo al final de la crisis (...) La burguesía agraria, incapaz de actuar en ; nombre propio, permitió a otros actuar para sus intereses utilizando primero a Somoza y después a los sandinistas." (Paige, J, 1989, p.125). A nuestro modo de ver, la burguesía ciertamente apoyó al movimiento revolucionario ante la carencia de una representación política que garantizase su estabilidad como clase, pero también luchaba por el mantenimiento de su poderío económico, el cual había decrecido en los últimos años debido a la excesiva concentración alcanzada por el *Clan Somoza* en esta

esfera. La habilidad del FSLN para proponer una ideología en torno a las raíces históricas del pueblo nicaragüense, el cual hallaba en Augusto César Sandino un símbolo de lucha (con las consignas "Nacionalismo versus Dependencia, Libertad versus Dictadura"), permitió que fuese extremadamente difícil para la oposición al Frente disputarle su legitimidad o la autoridad de su programa en los últimos años de lucha antisomocista. Además se desarrolló una tercera fuerza social cuya vinculación a la lucha revolucionaria fue determinante para el triunfo. Nos referimos a los sectores subalternos de la sociedad, quienes posibilitaron al Frente el control de las ciudades. Por tanto, se suele concluir que la Revolución Sandinista fue una gesta popular más fuerte en los barrios que en las fábricas.

Ante la debacle del régimen, la burguesía media comenzó a apoyar directamente al FSLN con armas, dinero y diversas formas de asistencia. Se trataba de derrocar a un régimen que no les brindaba oportunidades, lo que en palabras de algunos círculos se expresaba así: "no existe alternativa, no puede haber algo peor que esto", refiriéndose a la dictadura. Ya en 1978, un grupo de hombres de negocios nicaragüenses estableció contactos con el Frente Sandinista en Costa Rica. Sobre ello, Leonel Poveda, encargado de representar a este grupo, declaró: "Solicitamos la ayuda del FSLN para conseguir material de guerra, rifles, dinamita, munición, etc. Les dije que éramos 40 profesionales dispuestos a lo que fuera para derrocar a Somoza. El FSLN dijo que sí, que nos ayudaría." (Christian, Op. Cit, p.57). La conducción político-militar de la lucha contra el somocismo por el FSLN, "evitó que la intensa actividad popular resultara limitada a un esquema meramente antidictatorial que se redujera a un cambio de gobierno sin alterar el sistema social de base; y al mismo tiempo, su estrategia de amplias alianzas evitó que los elementos de la burguesía que se habían sumado a la lucha antidictatorial abandonaran el proceso ante el espectro de un octubre rojo" (Harris, R y Vilas, C, 1985, p.17).

El 10 de julio de 1979, desde Costa Rica, se anunció la formación de un Gobierno Provisional para Nicaragua integrado por cinco miembros: Daniel Ortega (FSLN), Sergio Ramírez (Los Doce), Moisés Hassan (MPU), Alfonso Róbelo (empresario del FAO) y Violeta Barrios de Chamorro (viuda del asesinado Pedro J. Chamorro). Se planteó asimismo, el Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que propuso la instauración de la economía mixta, el pluralismo político y el no-alineamiento, la formación de un ejército nacional y la confiscación de los bienes pertenecientes a Somoza y sus allegados. Finalmente Somoza, debilitado ante el amplio movimiento nacional en su contra, el cese del apoyo político y militar por parte de su hasta entonces cercano, el gobierno de los Estados Unidos, las divisiones al interior de la Guardia Nacional, la condena por parte de la organización de las Naciones Unidas y la OEA, decidió huir del país el 17 de julio de 1979, no sin antes escoger -de conjunto con el gobierno de Washington- a Francisco Urcuyo como su sucesor en el poder, quien debía negociar con el gobierno provisional. Luego, ante la ofensiva final del FSLN, Urcuyo también huyó del país. El 19 de julio de 1979, las columnas guerrilleras del Frente Sandinista entraron a Managua donde fueron recibidas con júbilo por un pueblo extenuado y esperanzado, luego de más de cuatro décadas de dictadura. El Estado somocista se encontraba prácticamente destruido y la Guardia Nacional había sido derrotada. La Dirección Nacional del Frente Sandinista y la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) "encontraron instituciones sin relación entre sí, que formaban parte del aparato administrativo anterior. El dictador y su ejército, última instancia de poder que tenía el aparato estatal, habían sido derrotados y ninguna otra institución sobrevivió como articulador." Se inició, desde entonces, la reconstrucción del país y la lucha por el poder político. Ahora se trataba de definir hasta qué punto la Revolución Sandinista podría satisfacer los intereses de la amplia coalición que posibilitó el triunfo revolucionario. De este hecho ya han pasado 30 años.

Reconstrucción e institucionalización de la Revolución (1979-1984).

Una vez consolidada la victoria, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, conformada a comienzos de julio de 1979, inició sus actividades. Con la Junta colaborarían un amplio grupo de asesores económicos, técnicos, administradores y científicos sociales. Durante el periodo 1979-1980, la Junta adoptó sus decisiones bajo poderes de emergencia. Siguiendo estas directrices, y por medio del Estatuto de la República de Nicaragua (agosto de 1979) se abolió la anterior Constitución y leyes constitucionales, se disolvió el Congreso, la Corte de Justicia, y "todas las estructuras que recordasen el poder somocista". En el Estatuto además, se establecieron las tres ramas del nuevo gobierno: La Junta de Reconstrucción, el Consejo de Estado y las Cortes de Justicia. La defensa de la revolución estaría a cargo ahora de la nueva fuerza armada nacional -en reemplazo de la Guardia Nacional de la dictadura- conformada y dirigida por ex-combatientes del Frente Sandinista. En palabras de Tomás Borge:

El gobierno sandinista se proponía crear una "Nueva Nicaragua", al abolir todos los vestigios de la extinta dictadura, la base de su poder económico y los vínculos externos que lo mantenían; además, se consideraba como meta la reconstrucción de la economía nacional, afectada como consecuencia de la guerra de liberación. Otro objetivo era la "reestructuración de la sociedad al reducir las desigualdades de clase, mejorar el nivel de vida e incrementar la influencia económica de las clases más bajas (Citado por Booth, J, 1985, pp.193-194).

Todas estas metas se planeaban llevar adelante transformando la estructura productiva heredada de la dictadura, sobre la cual se desarrollaría una agroindustria moderna que impulsara la exportación de café, algodón, azúcar, carne y banano como principales productos. Estos cambios se iniciaron con la conformación de un Área de Propiedad del Pueblo (APP), con base en los bienes confiscados al somocismo (20% de las tierras cultivables del país), a lo que se añadió un fuerte énfasis en las inversiones agrícolas, la nacionalización del comercio exterior, la banca y el impulso de una amplia reforma agraria promulgada en 1981. Estas medidas se inscribían en el Plan de Reactivación Económica en beneficio del pueblo, que preveía elevar sustancialmente el papel del sector estatal. Así, su aporte al PIB ascendería de un 15% en 1977, a 41% en 1980, al mismo tiempo que la parte

del sector privado disminuiría de 85% a un 59%, respectivamente. Este plan correspondía a la política de mantener la coexistencia entre la iniciativa privada y estatal, dentro de una economía mixta.

Conformación del nuevo gobierno revolucionario e inicios de la transición

Una vez asumido el poder, la Junta de Gobierno buscó llevar a la práctica el Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional -acordado previamente en San José, en julio de 1979- el cual se pronunciaba en favor de una política exterior de no-alineamiento, la creación de un régimen de democracia efectiva, de justicia y progreso social, que garantizase plenamente "el derecho de todos los nicaragüenses a la participación política y al sufragio universal, así como la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, sin discriminaciones ideológicas con excepción de los partidos y organizaciones que pretenden el retorno al somocismo."⁶ Al poder legislativo lo constituiría un Consejo de Estado encargado de compartir sus funciones con la Junta de Gobierno. Este órgano se aseguraría una amplia representatividad de las fuerzas políticas, económicas y sociales que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura somocista, y estaría conformado con 33 miembros en representación de éstas. El posterior rompimiento de este acuerdo inicial por parte del FSLN, tuvo como consecuencia la renuncia de dos de los miembros de la Junta de Gobierno: Alfonso Róbelo y Violeta Barrios de Chamorro -en abril y mayo de 1980, respectivamente-, lo que constituyó motivo de serios roces entre las élites nacionales y el Frente Sandinista.

Es de considerar que el Programa de Gobierno fue preparado con base en un anteproyecto redactado por el FSLN, el cual pese a que no satisfacía a las élites, finalmente fue aceptado por ellas, bajo presión de un grupo de empresarios, quienes estando fuera del país decidieron incluso la composición de la Junta. A los sectores tradicionalmente dominantes,

⁶ Programa de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en Nicaragua, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1981, p.105

por su parte, únicamente les interesaba derrocar al dictador, y así, de esta manera, reasumir su control sobre las distintas esferas del poder. Una vez obtenido el triunfo, las concesiones a las élites fueron un mecanismo táctico por parte del FSLN, que favorecía, en primera instancia, la fase de reconstrucción económica y la cooperación de Europa Occidental y América Latina, en particular México y Venezuela. Para mantener este apoyo internacional era menester respetar los activos de los grupos económicamente dominantes y permitirles su expansión, pues era claro que "la implementación de medidas económicas radicales habría precipitado una ruptura con la burguesía y sus aliados internacionales, lo que habría resultado un caos económico" (Pérez-Stable, M, op.cit, pp.137-138).

Consecuencias de la guerra insurreccional en la economía Nacional

Al triunfo de la revolución en Nicaragua, el Estado revolucionario recibió un país muy atrasado y dependiente. El nivel de desarrollo industrial era incipiente y guardaba estrecha dependencia al capital extranjero. Existía también una insuficiencia de personal capacitado en áreas técnicas y profesionales, a lo que se añadía, una profunda depresión económica. Casi todas las actividades estaban paralizadas, ya fuese debido a una fuerte descapitalización o como consecuencia de los efectos de la guerra, donde murieron más de 35 mil personas y resultaron heridas entre 80 y 100 mil. El economista E.V.K. Fitzgerald resume en cuatro aspectos los principales problemas que encontró la revolución al momento del triunfo: "El primero consistió en las pérdidas materiales y humanas durante los últimos años de la guerra de liberación; el segundo problema era la escasez de alimentos y el desempleo; el tercer problema fue la deuda externa, y el cuarto la necesidad de comenzar un proceso de reconstrucción de la economía, para así realizar todo cuanto no fue hecho antes (Fitzgerald, op.cit, p.208). Otras fuentes como el Banco Mundial, referidas al mismo periodo, nos muestran que la inversión privada se redujo prácticamente hasta cero desde principios de 1979, la producción disminuyó considerablemente entre junio y julio del mismo año, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 25%, y las exportaciones decrecieron en más de un 10% (Rivero, E, 1984, pp.106-113). Según la CEPAL, el monto

de las pérdidas materiales durante la guerra de liberación sumaban 480 millones de dólares, más 500 millones de dólares fugados al exterior, lo que daba casi 2.000 millones de dólares, es decir, equivalente a su propio PIB.⁷ Todas estas cifras nos muestran el precario estado de la economía nicaragüense al momento del triunfo, donde el 61.5% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Así, por ejemplo, en 1980 en Honduras, el 68.2% de la población se encontraba en tales condiciones, en El Salvador 68.1% y en Guatemala 71.1% (Vilas, C., 1988, p.32), un cuadro desolador, que haría posible el surgimiento y desarrollo de movimientos guerrilleros en estos países.

Con relación a la capacidad de crecimiento centroamericano a comienzos de los ochenta se observaba que dependía en alto grado de los desembolsos financieros provenientes del exterior. Esto se ilustra si tomamos como ejemplo el año 1977, donde el 13% del ahorro total se originaba de fuentes externas, y ya en 1981 esta proporción había aumentado a un 45.6% del total (CEPAL, 1986).

Consolidación del Gobierno Revolucionario

Una vez en ejercicio de sus funciones, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua emitió sus primeros decretos. Para los cargos de ministros fueron nombrados (julio de 1979) personas de diferentes tendencias políticas, hecho que no tardó en replantearse, mediante la recomposición de los ministerios (diciembre de 1979), lo que le permitió al FSLN un mayor control del poder. Un poco antes de estos hechos (noviembre de 1979) ya el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, se había pronunciado, en un extenso documento, sobre su inconformidad con el nuevo Gobierno de Reconstrucción Nacional, pues según ellos, no existía claridad sobre los alcances de las atribuciones del Estado y el Área de Propiedad del Pueblo; en otras palabras, sentían "marginado al sector privado", y consideraban que se estaba atentando en contra de su posibilidad de

⁷ CEPAL, El impacto de la mutación política, Santiago de Chile, 1983.

subsistencia como clase. Aún a pesar de los desacuerdos del Frente Sandinista con los diversos partidos políticos y el sector empresarial, en febrero de 1980 se conformó el Bloque Popular Patriótico (BPP), que incluyó la alianza entre los partidos y movimientos: Liberal Independiente, Partido Popular Social Cristiano (PPSC), Partido Comunista y el FSLN. Finalmente, sólo se mantuvieron en esta unión el PPSC, el PU, PSN y el Frente Sandinista, quienes formarían en junio de 1980 el Frente Patriótico Revolucionario (FPR).

Sobre las críticas que realizaban las élites tradicionales nicaragüenses respecto al desvío sandinista del proyecto original de realizar una revolución democrática y pluralista, Sergio Ramírez (miembro de la Junta de Gobierno) comentaba, a principios de 1981:

"La economía mixta y el pluralismo político pertenecen a la esencia misma del diseño sandinista (...) no nos hemos apartado del proyecto original. Pero si debido a la fuerza de las circunstancias la economía mixta, el pluralismo político y la libertad de prensa dejan de ser compatibles con la supervivencia de la Revolución, optaremos por ésta. El proyecto histórico del pueblo nicaragüense no es circunstancial. La Revolución no ganó el poder en las elecciones (...) el esquema de nuestra revolución es popular. Todo podría cambiar en Nicaragua, menos la hegemonía popular del proceso".

Sobre el mismo tema Daniel Ortega (también miembro de la Junta de Gobierno), declaraba, en el mismo año:

"Queremos marchar a un paso realista, equilibrado, maduro, y si para poder subsistir es necesario radicalizar este proceso revolucionario, pues vamos a radicalizar" (Proceso, No 246, México, 1981, p.15).

El ejercicio posterior de esta actitud radical, argumentando la necesidad de defender la revolución, conduciría a la ruptura del amplio bloque que posibilitó el triunfo contra la dictadura. En esto la experiencia nicaragüense se parecería a la cubana en la medida que so pretexto de defender la revolución cubana de la agresión externa, este país ha estado sometido durante ya 50 años a un régimen cerrado y autoritario.

El año 1980 fue declarado en Nicaragua Año de la Alfabetización. De marzo a agosto del mismo se realizó la cruzada nacional de alfabetización "Héroes y mártires por la liberación de Nicaragua" dirigida a la población mayor de 10 años, la cual permitió reducir la tasa de analfabetismo del 50.3% al 12.9%. Como consecuencia de este importante logro, la UNESCO otorgó a Nicaragua el premio Nadezhda Krupskaya.

Apoyo internacional

Después del triunfo revolucionario, el gobierno nicaragüense se propuso buscar apoyo exterior para la reconstrucción del país y ampliar vínculos diplomáticos y comerciales con la comunidad internacional. Ya en la fase de reconstrucción, fue notable la presencia internacional, manifestada en financiamiento y cooperación externa a Nicaragua. La solidaridad europea, de América Latina y Estados Unidos se hizo muy visible. A nivel de los países latinoamericanos, la ayuda cubana se manifestó en lo económico, militar y en lo referente a educación y salud. Desde julio de 1979 hasta 1982 la asistencia económica cubana alcanzó un monto de 286 millones de dólares (Schaw, T and Sims H, 1985, p.447). Es de anotar, que el inicio de las relaciones diplomáticas y comerciales entre el gobierno nicaragüense y los países socialistas se remonta a agosto de 1979, ocasión en la que Cuba abrió su Embajada en Managua, luego Vietnam en septiembre y la Unión Soviética (URSS) en octubre del mismo año -aunque desde 1944 formalmente se habían establecido las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y este último país-. Luego otras naciones de Europa Oriental también establecieron vínculos diplomáticos con Nicaragua.

A escala internacional no sólo hubo manifestaciones de apoyo económico y solidaridad con la Revolución Sandinista, pues existieron también, acciones económicas en su contra, manifestadas recién se iniciara el nuevo régimen. Así, por ejemplo, en 1980 el Congreso de los Estados Unidos condicionó un empréstito de 75 millones de dólares a Nicaragua. Los legisladores acordaron que un 60% de la ayuda debería ser invertida a nivel privado y

además, que los préstamos no podían utilizarse en programas donde participase personal cubano -en este caso, la campaña de alfabetización o en el sector de la salud. Más adelante, ese tipo de actitudes por parte de Estados Unidos se hicieron más frecuentes. Para ilustrarlo, citamos al investigador colombiano Apolinar Díaz-Callejas:

Dos días después de asumir el poder (enero 22 de 1981), el presidente Ronald Reagan ordena revisar un préstamo de 60 millones de dólares ya aprobado por el gobierno anterior; unos pocos días más adelante suspende la entrega de 15 millones autorizados por el Congreso; luego otros 9 millones para compra de trigo; se obstaculiza la exportación a Nicaragua de materias primas industriales; es vetado por Estados Unidos, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 mil dólares para pescadores de bajos ingresos en la Costa Atlántica de Nicaragua y a principios de 1983 bloquea las exportaciones de azúcar nicaragüense a EE.UU., en un 90% (Díaz-Callejas, A, 1985, p.85).

A pesar de estas acciones, la joven Revolución pudo mantenerse gracias a créditos de largo plazo, ayudas financieras y donaciones de un sinnúmero de países, entre ellos Argentina, Argelia, Brasil, España, Francia, Libia, México e Irán; a los que se agregó el entonces bloque socialista. El total de todos los empréstitos y donaciones en el periodo 1981-1983 alcanzó cerca de 2 billones de dólares, de los cuales un 19% provino de Europa Occidental y Canadá, un 14% de agentes multilaterales, un 31% de los países socialistas. El 31% restante de esta cifra correspondió a la contribución del Tercer Mundo (Fitzgerald, E.V.K., op.cit, pp. 272-273).

El año 1981 resultó para América Latina, y en particular para Centroamérica, un periodo muy crítico para su economía. Ello se debió al desmedido aumento de los precios de artículos de importación, en contraste con los precios estables de las mercancías de exportación. Debido a eso y a la inestabilidad de la revolución nicaragüense, se declaró -por medio de un decreto emitido por la JGRN- en este año el *Estado de Emergencia Económica*

y *Social*. Según esta ley, se considerarían como delitos la difusión de noticias falsas que provocasen alteración en los precios, salarios, víveres; la suspensión concertada del transporte público o privado; la realización de sabotajes en los centros de producción; los paros, las invasiones o tomas de tierras fuera de las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, entre otras medidas. Este decreto posibilitó la racionalización del gasto público, ahorrando con esto al gobierno 924 millones de córdobas en recursos, durante el periodo 1981-1982.

En los primeros años del nuevo gobierno, otros aspectos formarían parte del interés de la JGRN. Así, para dirimir las relaciones entre el gobierno revolucionario y la Iglesia Católica, la dirección del FSLN publicó en 1980 el documento *Los cristianos en la Revolución Popular Sandinista*. Aspectos sobresalientes de este documento se referían a la libertad de cultos y garantías del gobierno para profesarlos; el derecho de los creyentes, que aceptasen las metas del FSLN, a tomar parte en la consecución de estas; el respeto y el apoyo del Frente Sandinista a todas las tradiciones religiosas, a condición de que no fuesen usadas en contra de la Revolución; y el derecho de los representantes de la Iglesia a tomar parte de las actividades políticas, incluso a nivel del gobierno. El Episcopado nicaragüense contestó a ese documento con la Carta Pastoral *Jesucristo y la unidad de su Iglesia en Nicaragua*, donde señaló "el asedio de las ideologías materialistas en contraste con la fe Católica", y además criticó la diversidad de criterios al interior de la misma Iglesia nicaragüense ya que, según ellos, existían sacerdotes que se estaban "apartando de la doctrina del Papa y los obispos", al referirse a aquellos religiosos colaboradores de la Revolución y del gobierno sandinista, quienes desde antes del triunfo, se habían vinculado como colaboradores de la lucha revolucionaria (Mamantov, S, 1982, p.51). Un ejemplo de ello fue la Comunidad de Solentiname en Nicaragua, fundada por el padre Ernesto Cardenal, que había sido destruida por la dictadura, donde salieron militantes del Frente Sandinista. La actitud de la Iglesia Católica a partir del inicio de los Ochenta, contrastaba con su postura en los últimos años de la lucha contra la dictadura, cuando aceptaba la

búsqueda de una Nicaragua democrática, comprometiendo para ello a jóvenes cristianos en la lucha revolucionaria. En síntesis, el periodo de reconstrucción nacional en Nicaragua, al igual que todo proceso pos revolucionario, tuvo grandes dificultades propias de la transición a un nuevo modelo político y económico, que en este caso se proponía la constitución de una nueva Nicaragua.

Desafortunadamente, hoy luego de 30 años sólo quedan cenizas de los logros de esa revolución y el *nuevo sandinismo* liderado por el eterno dirigente Daniel Ortega (hoy nuevamente presidente) parece como un barco sin rumbo obstinado en permanecer en el poder a toda costa, mientras la mayoría de la población se mantiene olvidada y condenada a *otros años cien años de soledad*, como en los años de la dictadura somocista ya que las transformaciones sociales de los primeros años de la revolución se han ido diluyendo. La reforma a la Constitución política que permitió facilitar el triunfo del FSLN en las últimas elecciones dejó un sabor amargo a la democracia en este país pues el precio de ella fue la alianza entre sectores variopintos de la política, todos con el único afán de mantener o recuperar el poder y privilegios *a cualquier precio*.

BIBLIOGRAFÍA

BARAHONA PORTOCARREÑO, Amaru (1981), “Breve estudio sobre la historia contemporánea en Nicaragua”, en: América Latina, Historia de Medio siglo, Universidad Nacional Autónoma de México, Siglo XXI Editores.

BOOTH, John (1985). “The end and the beginning, the Nicaraguan Revolution, London, Boulder Westview Press.

CEPAL (1986), La Crisis Centroamericana: orígenes, alcances y consecuencias, México.

CEPAL, (1983), “Nicaragua: repercusiones Económicas de los Acontecimientos Políticos Recientes”. Agosto de 1979. En: Estudio Económico de América Latina y el Caribe, año 1981, Santiago de Chile, Naciones Unidas.

- COLLINS, Joseph (1982), "What difference could a revolution make?", Institute for food and development Policy, N. San Francisco.
- CORAGGIO, José Luis y TORRES, Rosa María (1987), Transición y Crisis en Nicaragua, San José, Editorial DEI.
- CORAGGIO, José Luis (1985). Nicaragua: Revolución y democracia, México, Coordinadora regional de Investigación Económica y Social.
- CHRISTIAN, Shirley (1987), Nicaragua: Revolución en la familia, Buenos Aires, editorial Sudamericana-Planeta.
- DÍAZ-CALLEJAS, Apolinar (1985), Contadora: Desafío al imperio, Bogotá, Editorial Oveja Negra.
- DODSON, Michael y O'SHAUGHNESSY, Laura, "Religion and politics", en: WALKER, Thomas (1985), Nicaragua the first Five Years, New York.
- FITZGERALD E.V.K., (1989), "Problems in financing a revolution: accumulation, defence and income distribution in Nicaragua 1979-1986", en: Financing economic Development: a Structural Approach to Monetary Policy, Great Britain, Grower.
- GILBERT, Dennis (1985), "The bourgeoisie", en: WALKER, Thomas, Nicaragua the First five years.
- HARRIS, Richard y VILAS, CARLOS m (1985), La Revolución en Nicaragua: Liberación Nacional, Democracia Popular y Transformación Económica, México, editorial Era.
- LABASTIDA, Jaime, Rosenthal, Gert y Edelberto torres Rivas (1984), Centroamérica: Crisis y Política Internacional, México, Siglo XXI Editores.
- LOZANO, Lucrecia (1985), De Sandino al triunfo de la revolución, México, Siglo XXI Editores.
- MURO, Mirta et al (1986), Nicaragua y la Revolución sandinista, La Habana, Editorial Ciencias Sociales.
- MARTÍ I PUIG, Salvador (1997), La Revolución enredada, Nicaragua 1977-1996, Madrid.

NUÑEZ SOTO, Orlando (1987), *Transición y Lucha de Clases en Nicaragua (1979-1986)*, México, Siglo XXI Editores.

PAIGE, Jeffery (1989), "Revolution and the agrarian bourgeoisie in Nicaragua", en: Terry Boswell (ed), *revolution in the World System*, USA, Greenwood Press.

PÉREZ-STABLE, Marifeli, "The working class in the Nicaraguan revolution", en: WALKER Thomas (1985), *Nicaragua the first five years*, New York.

PÉREZ, Andrés (1992), "The FSLN after the debacle: the struggle for the definition of Sandinismo", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 34, No 1.

PRIETO, Alberto (1988), *Crisis burguesa e imperialista en América Latina*, La Habana, Editorial Ciencias Sociales.

STAHLER-SHOLCK, Richard (1990), "Stabilization, destabilization and the popular classes in Nicaragua 1979-1988", *Latin American Research Review*, Vol.25, No 3.

VILAS, Carlos M, (1987), *Transición desde el subdesarrollo, Revolución y Reforma en la periferia*, Caracas, editorial Nueva Sociedad.

VILAS, Carlos M, (1984), *Perfiles de la Revolución Sandinista*, La Habana, Casa de las Américas.